

# CUADERNOS DE HISTORIA 58

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS  
UNIVERSIDAD DE CHILE - JUNIO 2023: 121-145

---



## “YA NO QUEREMOS MÁS PROMESAS”. TIEMPO HISTÓRICO, EXPECTATIVAS Y CONFLICTO SOCIAL EN LA MOVILIZACIÓN DE LAS FAMILIAS ALLEGADAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA \*

*Cristina Moyano Barahona\*\*  
Santiago Braithwaite Castillo\*\*\**

**RESUMEN:** Este artículo analiza las demandas sociales de las familias allegadas de Santiago de Chile entre 1990 y 1994 y cómo estas participaron en la construcción del tiempo histórico tras el fin de la dictadura. En ese sentido, planteamos que la experiencia de la transición se configuró a partir de temporalidades no lineales ni ajustadas al discurso hegemónico de la elite concertacionista, que intentó instalar “la espera” como eje de la consolidación democrática en tanto futuro, principalmente a través de la contención de la conflictividad del presente. Para ello, rastreamos las principales acciones colectivas de los pobladores en los primeros cuatro años de gobierno civil y cuestionamos la uniformidad de la experiencia transicional.

**PALABRAS CLAVE:** tiempo histórico, transición a la democracia, tomas, pobladores sin casa.

\* Resultados del proyecto Fondecyt 1190059.

\*\* Académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Doctora en Historia. Santiago, Chile. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4517-2688>. Correo electrónico: [cristina.moyano@usach.cl](mailto:cristina.moyano@usach.cl).

\*\*\* Doctorando de la Universidad de Santiago de Chile. Magister en Historia. Santiago, Chile. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0078-1073>. Correo electrónico: [info.shago@gmail.com](mailto:info.shago@gmail.com).

*“WE DON’T WANT ANY MORE PROMISES”. HISTORICAL TIME,  
EXPECTATIONS AND SOCIAL CONFLICT IN THE MOBILIZATION OF TENANT  
FAMILIES IN THE FIRST YEARS OF THE TRANSITION TO DEMOCRACY*

*ABSTRACT: This article analyzes the social demands of the tenant families in Santiago, Chile between 1990 and 1994, wondering how they participated in the construction of the historical time after the end of the dictatorship. In this sense, we propose that the experience of the transition was configured from non-linear temporalities or adjusted to the hegemonic discourse of the concertationist elite, which tried to install “waiting” as the axis of democratic consolidation in the future, mainly through the containment of the conflict of the present. To do this, we trace back the main collective actions of the settlers in the first four years of civil government and question the uniformity of the transitional experience.*

*KEYWORDS: historical time, transition to democracy, squatting, homeless people.*

Recibido: 12 de marzo de 2021

Aceptado: 8 de julio de 2021

### *Introducción*

El problema de la vivienda de las familias allegadas, definido como *“prioridad fundamental”* en el programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia de 1989<sup>1</sup>, expresó una de las caras más duras de la herencia dictatorial. El déficit habitacional se calculó entre 918 000 y 845 000 viviendas para el período 1990-1992<sup>2</sup>. La persistencia histórica de este problema, que en la década anterior se había manifestado en una serie de episodios conflictivos<sup>3</sup>, causó la temprana alerta de las nuevas autoridades, las que orientaron una serie de esfuerzos para la contención de un potencial reventón social. En concordancia, nuestro estudio demuestra que, durante el primer gobierno de la Concertación, sucesivos intentos de tomas y de viviendas lo atizaron, dando cuenta de la continuidad de una centenaria demanda social.

<sup>1</sup> Aylwin, 1989, p. 27.

<sup>2</sup> Resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, División Social del Ministerio de Desarrollo y Planificación, Gobierno de Chile, 1998.

<sup>3</sup> Entre 1980 y 1983 se produjeron 17 tomas de terrenos, mayoritariamente reprimidas. Véase Rosenmann, 2016.

Escasas investigaciones han considerado las movilizaciones de los sin casa durante los primeros años de la postdictadura<sup>4</sup>, por lo que buscamos pesquisar cómo este conflicto formó parte de una contienda pública por el control de las expectativas políticas respecto al proceso de transición a la democracia. El objetivo central es indagar en la participación de los allegados en la construcción del tiempo sociohistórico, distinguiendo entre *transición a la democracia* como categoría analítica, que establece el paso a un régimen democrático, a su comprensión como *concepto político* contenedor de experiencia y expectativa. En particular, intentamos desmontar la tesis de que la década de los 90 fue de baja movilización social, caracterizada por la contención de los conflictos mediante dinámicas de acuerdos, pactos y consensos y que instaló el “tiempo de espera” como la expectativa de una democratización que vendría en un futuro<sup>5</sup>.

Esta investigación debate con la interpretación sobre las dinámicas del problema de la vivienda de los allegados realizada por Alfredo Rodríguez, quien, en 1994, enfatizaba que la acción del MINVU durante el período 1990 a 1994 “fue un notable éxito”, puesto que “se temía que hubiera tomas masivas de terrenos: no hubo; se temía que bajara el ritmo de construcción de viviendas: aumentó”<sup>6</sup>. La gran lección de esos cuatro años fue, de acuerdo con el arquitecto, dar una solución política al problema de la vivienda a través de “apertura, confianza, integración, junto con un discurso no populista. Y se hizo lo que se decía: construir todo lo posible”<sup>7</sup>.

A más de un cuarto de siglo de dicha afirmación, urge que nuevos estudios exploren aquellos campos de relaciones entre el sistema político y los sectores populares urbanos. Centrados en estos tópicos, este artículo explora la reemergencia de este conflicto social durante el período, que fue menguando la capacidad hegemónica de las elites para imponer “tiempos de espera” a través de un cuestionamiento de las formas de participación social consensuadas por estas: la persistencia del movimiento de pobladores en su demanda por el derecho a la vivienda, a través de variados repertorios de acción colectiva, interpeló este relato y erosionó parcialmente la narrativa de la consolidación democrática y, por ende, articuló parte de los malestares recogidos en 1998<sup>8</sup> en el significativo informe del PNUD.

<sup>4</sup> De la Maza, 2002; Espinoza, 1993.

<sup>5</sup> Tironi, 2003, p. 19.

<sup>6</sup> Rodríguez, 1994, p. 144.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 146.

<sup>8</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998.

En suma, nuestra hipótesis es que existió una transición en tanto “relato de experiencia democrática limitada”, que dibujaba una expectativa futura de mayor democratización por parte de la elite intelectual de la Concertación que cancelaba el conflicto social inmediato, contrapuesta al tiempo sociohistórico que distintos actores sociales organizados experimentaron y que alimentaron las narrativas del malestar<sup>9</sup> que, hacia fines de la década de 1990, ya habían erosionado fuertemente la hegemonía del relato transicional y que combinaron la urgencia, la contención y la espera en una triple dimensión temporal.

La idea de que la transición no fue lineal ni una experiencia unívoca, ha alentado la exploración de la pluralidad de experiencias que diferentes actores sociales tuvieron en el período, ya sea de forma tensionada, consensuada o conflictiva<sup>10</sup>. Esta premisa apunta a la historización de las agencias que han sido invisibilizadas en los análisis politológicos, que se han concentrado en las transformaciones y continuidades institucionales del período. Ahora bien, el presente trabajo subraya la relación antagónica de los movimientos sociales con la formación de un relato hegemónico sobre las formas de articulación “del sentido del tiempo”, generado por las elites políticas concertacionistas, los medios de comunicación tradicionales y la intelectualidad orgánica, que buscaron fundar la idea del tiempo como “transición y consolidación democrática”<sup>11</sup>.

Autores como Moulian y Lechner plantearon, hacia fines de la década de 1990, que la principal característica del tiempo transicional fue su orientación a la sensación de un presente que obliga, como destino inexorable, a restar sentido al pasado. Que expresa, sin embargo, con silenciosa elocuencia bajo las formas de la depresión, la desesperanza, el fatalismo, la sensación de ahistoricidad de la historia<sup>12</sup>. De allí que una de las paradojas de este proceso fuera el incremento de la libertad individual acompañada del crecimiento de una sensación de impotencia colectiva en la sociedad, que nubló su relación con el futuro<sup>13</sup>.

En un sentido complementario, Pedro Güell resaltó que las elites políticas del período tuvieron la capacidad de instalar exitosamente su visión de futuro,

<sup>9</sup> Conjunto de narrativas que hacia 1998 cobró fuerza como corpus de ensayos en los que se critica los límites y alcances de la transición a la democracia. Se encarnaron en autores como Norbert Lechner, Tomás Moulian, Nelly Richard, Gabriel Salazar, Alfredo Jocelyn Holt, entre otros.

<sup>10</sup> Ponce, 2018, pp. 10-11.

<sup>11</sup> Güell, 2009, p. 23.

<sup>12</sup> Moulian, 1997.

<sup>13</sup> Lechner, 2002.

desarrollando y haciendo creíble este relato del tiempo hasta entrada la primera década de 2000. De acuerdo con el autor, este relato logró generar una hegemonía cultural en la medida que las elites “organizaron *elementos dispersos de la subjetividad social y los vincularon orgánicamente a un orden estatal* en base a un componente mítico: *el terror que produce un pueblo que exige su parte de la fiesta sin esperar más*”<sup>14</sup>. Aquello implicó construir en el presente un orden de sacrificios para garantizar la estabilidad política, entre los que se contaron numerosas demandas sociales. Una de ellas fue la de los allegados y los sin casa. Por lo anterior, resaltamos que el relato de las elites en los primeros años de la transición a la democracia presupuso la consolidación del orden social y político como condición previa para la regulación de los conflictos sociales<sup>15</sup>. La *política de los acuerdos* y de los cambios mínimos buscó persuadir a la sociedad chilena de “un tiempo de espera” para la resolución de sus demandas sociales. No obstante, como veremos en las siguientes páginas, la reivindicación de los allegados alcanzó nuevos ribetes de conflictividad social en los primeros años de la transición, mostrando una cierta resistencia a la instalación hegemónica del relato transicional.

Metodológicamente, nuestro trabajo se basa en el análisis de una serie de eventos de protestas, en este caso, ocupaciones de terrenos y de viviendas realizadas por familias sin casa en Santiago entre enero de 1990 y marzo de 1994, que conformaron un ciclo de movilización que presionaron al sistema político. Este análisis fue generado a través de una revisión sistemática de diferentes registros de prensa, sesiones del Congreso Nacional y de los informes de análisis semanales de coyuntura de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Para los fines de este artículo, presentaremos aquellos eventos que causaron mayor impacto público y que develaron las posiciones de diferentes actores sobre esta contienda, bajo la consideración de que la acción social se realiza sobre una lectura del tiempo y lo reestructura, configurando una acción política sobre el mismo.

### *El conflicto por la vivienda en el primer gobierno de la Concertación*

Durante este período se estableció una nueva relación entre el Estado y las demandas de los pobladores, que pasó de la represión y el no diálogo con las organizaciones de los allegados hacia una orientada a la contención del conflicto social. Así, la transición a la democracia estructuró nuevas oportunidades

<sup>14</sup> Güell, 2009, *op. cit.*, p. 31.

<sup>15</sup> Tironi, 1992.

políticas para los allegados, en donde la organización del tiempo social como forma de expectativa política y de espera ocupó un lugar central.

La contienda de las familias pobladoras durante el gobierno de Patricio Aylwin se realizó en un ambiente político limitado por la custodia de la democracia por parte de Augusto Pinochet, quien continuó como comandante en jefe del Ejército hasta 1998. De esta manera, el nuevo régimen mantuvo importantes restricciones para el desarrollo democrático y del propio gobierno, entre las que destacan la constitución del poder legislativo, de los municipios con autoridades designadas desde la dictadura, reductos autoritarios en el poder judicial y en el Tribunal Constitucional, además de numerosas normas de amarre establecidas en la Constitución de 1980.

Lo anterior permite explicar por qué existe un cierto consenso acerca de que el principal adversario del primer gobierno de la transición fue, entonces, el propio Ejército de Chile. Cerrar otros posibles flancos de conflictividad social resultó de primera importancia para el gobierno, por lo que destinó especial atención a su relación con el empresariado y con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)<sup>16</sup>, mas, existían otros focos complejos como el déficit habitacional acumulado, que bordeaba entre ochocientas mil a novecientas mil viviendas, por lo que la intervención del Estado en esta materia estuvo teñida por una concepción limitada al tiempo *de lo posible*<sup>17</sup>.

La política habitacional hacia los pobladores estuvo compuesta por el Programa de Vivienda Básica y, en menor medida, por el Programa de Vivienda Progresiva, lo cual logró *contener* el explosivo crecimiento del fenómeno del allegamiento en la década del 90<sup>18</sup>. Sin embargo, los resultados del aumento de las tasas de construcción de viviendas aún eran bajos en los primeros años de la transición. El gobierno estipuló que en 1990 existían trescientos mil postulantes al subsidio habitacional y solo había posibilidad de entregar doce mil soluciones<sup>19</sup>. Por tanto, ordenar la demanda y elaborar listas de espera como forma de constituir un tiempo de mediación a la demanda, fue un asunto relevante para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el gobierno, para el tratamiento de la presión social de los allegados.

<sup>16</sup> Álvarez, 2015; Ponce, 2018, *op. cit.*

<sup>17</sup> *Vivienda, una tarea de dignidad. Estrategia habitacional al año 2000*, División de Política Habitacional, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2000.

<sup>18</sup> Estos fueron los principales programas de construcción de viviendas subsidiadas por el Estado destinados a familias de bajos recursos económicos.

<sup>19</sup> Secretaría General de la Presidencia, *Informe de análisis*, 28 de abril al 4 de mayo de 1990, Archivo Presidencial Patricio Aylwin Azócar.

La política habitacional de la dictadura había restringido firmemente cualquier tipo de negociación con las agrupaciones de pobladores sin casa, pese a la persistencia de estos en organizarse en comités de allegados. Para los ideólogos del modelo subsidiario, este era un problema individual de cada familia<sup>20</sup>. Por el contrario, el gobierno de Aylwin promovió estas formas de organización y modificó los programas mencionados<sup>21</sup>, con tal de permitir la postulación colectiva, es decir, para legalizar los comités de vivienda y allegados.

El Estado reconoció como interlocutores válidos a los dirigentes de los comités, con quienes se levantaron puentes de diálogo a través de las mesas de trabajo. Esta apertura institucional a la negociación de soluciones colectivas produjo un cambio en el desarrollo de las reivindicaciones habitacionales de los pobladores: la contienda se desarrolló en esta arena, pues permitió la canalización de las demandas de los comités, su reconocimiento legal y su interlocución tanto con la Intendencia Metropolitana, el MINVU, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) o los municipios locales, aunque estos no garantizaran soluciones.

Entre 1990 y 1991, la organización de los allegados tuvo un crecimiento sostenido. Si bien se mantuvo en funcionamiento la Coordinadora Metropolitana de Pobladores<sup>22</sup>, la expansión de los comités provino desde agrupaciones gestadas desde *abajo hacia arriba*, es decir, desde comités de vivienda asociados a la población de residencia, a veces organizados por sus juntas de vecinos, que avanzaron hacia la promoción de espacios de encuentro y de articulación a nivel comunal o zonal de la ciudad. Entre estas cabe mencionar la Coordinadora de Allegados de la Zona Sur Laura Rosa Méndez, la Agrupación Comunal de Comités de Allegados de Pudahuel y la Coordinadora Comunal de Allegados de Peñalolén, posteriormente convertida en la Unión Intercomunal de Allegados de la Zona Oriente de Santiago. Este ciclo de organización de la demanda expresó una fuerte expectativa sobre soluciones para el problema de la vivienda, que rápidamente mostró sus insatisfacciones.

En paralelo, los partidos políticos, en gran parte, mantuvieron activos frentes orgánicos específicamente destinados a los problemas de las poblaciones. La

<sup>20</sup> Gilbert, 2002.

<sup>21</sup> El Decreto Supremo 140 reglamenta el Programa de Viviendas Progresivas y entró en vigencia el 10 de octubre de 1990. Sobre el funcionamiento del Programa de Vivienda Básica, véase Díaz Mujica, 1997.

<sup>22</sup> Organización vinculada al Partido Comunista (PCCh) que ocupó un importante rol dentro de la protesta poblacional en dictadura y que tuvo entre sus principales dirigentes a Claudina Núñez.

Unión Demócrata Independiente (UDI), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical (PR) y el Partido Socialista (PS) conservaron sus departamentos poblacionales<sup>23</sup>. No fue extraña la intervención de algunos diputados frente al MINVU por soluciones para los allegados de su distrito<sup>24</sup>. Por ejemplo, la diputada de Renovación Nacional y exalcaldesa designada de Peñalolén, María Angélica Cristi, pese a considerar nociva la postulación colectiva y solicitarle en la Cámara de Diputados al ministro de Vivienda, Alberto Etchegaray, la eliminación de los comités de vivienda, reconoció apoyar las gestiones de cerca de quince de estos<sup>25</sup>.

Tras diecisiete años de dictadura militar y un sostenido crecimiento del problema de los allegados en las poblaciones de Santiago, la expansión de los comités fue acompañada de la generación de un tiempo de expectativa frente a la transición a la democracia, probablemente alentado por el sentido de urgencia que transversalmente los partidos políticos y autoridades otorgaron al problema del allegamiento. La expectativa de los sin casa, como forma de experiencia del tiempo social, estuvo marcada por la tensión entre los medios de contención y de resolución de su potencial conflictivo. La generación de filas de espera como una expresión de estos medios de contención/resolución del conflicto, fueron una muestra de ello. Sin embargo, sostenemos que, a través de una serie de movilizaciones durante el período, los allegados instalaron otros ritmos y dinámicas, sobrepasando el tiempo institucional que mostraba sus limitaciones e insatisfacciones para con las demandas sociales, sentidas como “urgentes”.

El conjunto de los comités de allegados se organizó con el fin de obtener soluciones habitacionales. En base a este principio, tomaron diferentes medidas para conquistar este objetivo. La amplia mayoría de los comités aceptó la participación institucional propuesta por el MINVU. Dentro de este universo, solo una fracción puso en movimiento acciones de protesta para acelerar dichos procesos. No obstante, este ciclo de movilizaciones de los allegados, que tuvo su momento más álgido entre 1991 y 1992, se caracterizó por la presión a través de tomas de terrenos y de viviendas sobre el sistema político, causando diferentes reacciones que normalmente se iniciaban con la presencia de la fuerza pública y, luego, devenían en negociaciones con las autoridades, cuestionando los tiempos de espera. Otra forma de respuesta estatal al problema de la

<sup>23</sup> *El Mercurio*, Santiago, 12 de junio de 1990, p. C10; *La Segunda*, Santiago, 8 de agosto de 1990, p. 7; *El Mercurio*, Santiago, 24 de diciembre de 1990, p. C2.

<sup>24</sup> *La Tercera*, Santiago, 11 de noviembre de 1990, p. 39; *El Mercurio*, Santiago, 8 de enero de 1991, p. C2; *La Época*, Santiago, 22 de octubre de 1991, p. 21.

<sup>25</sup> Cámara de Diputados, *Boletín de sesiones*, 18 de junio de 1991, pp. 924-925.

vivienda fue la elaboración de prácticas políticas de contención del conflicto, que profundizaremos en las siguientes páginas para analizar la producción del tiempo social de la transición.

### *Las tomas del verano de 1990*

Tras un intenso ciclo de movilizaciones de los pobladores durante la dictadura militar, las tomas de terrenos y de viviendas parecieron detenerse<sup>26</sup>. Entre 1988 y 1989, apenas se registró solo una ocupación ilegal, tras el intento de toma de la población Salvador Dalí en La Pintana, que terminó con una pobladora asesinada por la policía<sup>27</sup>. Por este motivo, el resurgimiento de las tomas en el verano de 1990 causó la alerta de las autoridades del nuevo gobierno *ad portas* de asumir.

En febrero de ese mismo año, se registraron cuatro tomas de terrenos en Santiago. El miércoles 7, entre treinta a cuarenta familias allegadas ocuparon una cancha de fútbol de propiedad del SERVIU en la población José María Caro de la comuna de La Cisterna. Unos días después, acusaron que Carabineros les derribó las piezas que intentaron armar con paneles de madera que habían conseguido gracias al apoyo de los vecinos del sector<sup>28</sup>. Luego de una semana, una pequeña toma realizada por diez familias en las cercanías de Departamental con Santa Rosa en San Miguel fue desalojada por los uniformados<sup>29</sup>, mientras los allegados en la cancha tomada de la José María Caro solicitaban la mediación de las autoridades del MINVU<sup>30</sup>.

El 12 de febrero, alrededor de ciento cincuenta familias de la comuna de Maipú también habían ocupado un sitio eriazo ubicado en el paradero 16 de la Avenida Pajaritos. La acción, según explicó una de sus dirigentes, fue motivada por el incumplimiento de las promesas realizadas por el alcalde de esa comuna, Rafael Pino. Tras la mediación de algunas autoridades municipales, la toma fue abandonada bajo la supervisión de Carabineros<sup>31</sup>.

El 21 de febrero, el gobierno militar a través de su ministro del Interior, argumentó que este régimen tenía la obligación de *defender el concepto de la*

<sup>26</sup> Iglesias, 2011.

<sup>27</sup> *La Época*, Santiago, 18 de julio de 1989, p. 1.

<sup>28</sup> *La Época*, Santiago, 14 de febrero de 1990, p. 15.

<sup>29</sup> *El Mercurio*, Santiago, 15 de febrero de 1990, pp. A1-A12.

<sup>30</sup> *El Mercurio*, Santiago, 20 de febrero de 1990, p. C5.

<sup>31</sup> *La Época*, Santiago, 13 de febrero de 1990, p. 13.

*propiedad privada* y anunció que no aceptaría más tomas<sup>32</sup>. Dos días después, cerca de veinte familias ocuparon un terreno en Quinta Normal, donde montaron carpas y banderas de Chile. La intervención del alcalde de dicha comuna permitió la rápida resolución de la ocupación, la cual fue abandonada durante el mismo día. Según Betty Barahona, una de sus dirigentes, esto fue posible porque “nos han prometido arreglar nuestro problema, ojalá sea cierto porque si no vamos a seguir tomando medidas más drásticas”<sup>33</sup>.

Esta serie de eventos causaron el posicionamiento de parte del sistema político. Mientras la UDI acusó al Partido Comunista (PCCh) de promover las ocupaciones de terrenos y de prometer prontas soluciones a los allegados con el fin de conseguir apoyo para legalizar su partido<sup>34</sup>, el PR señaló que serían los propios elementos proclives al gobierno militar los que estaban tras estas tomas, *con el objetivo de crear incertidumbre y entorpecer el inicio de la gestión de Patricio Aylwin*<sup>35</sup>.

En la misma línea, el secretario general de la DC, Gutenberg Martínez, declaró que el objetivo de “estos cuatro años es lograr de verdad reconstruir la democracia y creemos que saben que toda política radicalizada en la materia, no es más que una política de hacerle el juego a quienes quisieran desestabilizar esta democracia”<sup>36</sup>. Estas declaraciones dan cuenta de la gestación de un discurso que supuso a las tomas como una amenaza para el proceso de transición a la democracia, provocada por elementos externos a los allegados, sea la UDI o sea el PCCh. En concordancia, durante esta coyuntura fueron publicadas notas editoriales en *La Segunda*, *La Época* y *El Mercurio* que emparentaron la presión “indebida” de los pobladores con el uso de la violencia<sup>37</sup>.

Las declaraciones del recién nombrado ministro de Vivienda, Alberto Etchegaray, son elocuentes, al condenar las tomas por considerar que “son actos que ponen en peligro el equilibrio global de gobierno y que crean inestabilidad”<sup>38</sup>. Para el ministro, las tomas involucraban “una delicada forma de presión que hace que la situación global en la cual se inserta la

<sup>32</sup> *La Época*, Santiago, 22 de febrero de 1990, p. 13.

<sup>33</sup> *La Segunda*, Santiago, 23 de febrero de 1990, p. 3.

<sup>34</sup> *La Época*, Santiago, 15 de febrero de 1990, p. 16.

<sup>35</sup> *El Mercurio*, Santiago, 14 de febrero de 1990, p. C4.

<sup>36</sup> *El Mercurio*, Santiago, 15 de febrero de 1990, p. C6.

<sup>37</sup> *La Segunda*, Santiago, 15 de febrero de 1990, p. 6; *La Época*, Santiago, 15 de febrero de 1990, p. 6; *El Mercurio*, Santiago, 17 de febrero de 1990, p. A3.

<sup>38</sup> *La Época*, Santiago, 13 de febrero de 1990, p. 13.

política de un gobierno, se fragilice”<sup>39</sup>. En suma, el tiempo de la espera debía imponerse frente al de la urgencia, por muy relevante que fuera el contenido de la demanda social.

La situación provocada por las ocupaciones generó la oportunidad para un primer acercamiento entre la Coordinadora Metropolitana de Pobladores y el MINVU. Pese a reconocer que no participaron de las tomas mencionadas, aseguraron en una declaración pública tras la reunión, que dichas acciones eran consecuencia de las promesas incumplidas por parte de los alcaldes, y que “en medida que este gobierno vaya respondiendo a las soluciones inmediatas, hay menos posibilidades de que se creen conflictos. No estamos por jugar a la desestabilización. Las tomas son consecuencia de la burla que se ha realizado a los pobladores”<sup>40</sup>.

Un par de meses después, en un informe de análisis de coyuntura de la SEGPRES, se sugirió tomar en cuenta la limitación de recursos que existen para hacer frente al problema de los allegados, así como de la dispersión de sus organizaciones que dificultaba su interlocución. Para hacerle frente a esta situación se propuso: el mejoramiento de la coordinación partidaria al interior del bloque concertacionista, en conjunto con la elaboración de una estrategia comunicacional “adecuada” y el fortalecimiento de las redes ministeriales que intervienen en esta materia<sup>41</sup>.

Las tomas de terrenos del verano de 1990 no solo dieron mayor énfasis y urgencia al grave problema habitacional que atravesaban miles de familias y que era transversalmente reconocido por el sistema político, sino que dieron cuenta del potencial conflictivo y desestabilizador de estas, según los informes de análisis de la SEGPRES que revisamos. A nuestro juicio, estas movilizaciones justamente dan cuenta, de forma prematura, de la relación que entabló el gobierno con las protestas de los allegados en los meses y años siguientes y de dos elementos constitutivos de la disputa por las expectativas políticas en la transición: por una parte, el sentido de emergencia que los propios pobladores sin casa daban a su problema de vivienda y, por otra parte, la necesidad del gobierno de controlar dichos tiempos, dentro del tiempo del relato de la espera y la consolidación democrática.

<sup>39</sup> *La Época*, Santiago, 16 de febrero de 1990, p. 13.

<sup>40</sup> *El Mercurio*, Santiago, 16 de febrero de 1990, p. C5.

<sup>41</sup> Secretaría General de la Presidencia, *Informe de análisis*, 28 de abril al 4 de mayo de 1990, Archivo Presidencial Patricio Aylwin Azócar.

### *Las tomas del sector de Los Morros*

Entre la tarde invernal del viernes 3 y el domingo 5 de agosto de 1990, se realizaron cuatro tomas de terrenos en el sector de Los Morros de la comuna de La Cisterna, en la zona sur de Santiago, protagonizadas por alrededor de seiscientos familias organizadas en comités de vivienda, abriendo el primer conflicto por la vivienda bajo el nuevo gobierno de transición. Fueron sus propios dirigentes los que contaron a la prensa los motivos de la protesta. En la reunión realizada entre los comités y los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo en la mañana de ese viernes, la entidad gubernamental comunicó que no habría soluciones para ellos<sup>42</sup>. Frustradas sus expectativas, los pobladores decidieron ponerle urgencia a su problema a través de las tomas de terrenos. Por el tiempo que demoraron en realizarlas, es evidente que los comités se encontraban organizados para la movilización.

Las primeras ocupaciones se hicieron al anochecer de ese día en las poblaciones Almendros I y Almendros II. En la primera, se tomaron un terreno destinado a áreas verdes alrededor de ochenta familias, y en la población Almendros II, noventa familias más se tomaron una cancha de fútbol. Estas se realizaron de forma coordinada entre sí, y organizaron grupos de vigilancia en las ocupaciones orientados al control interno y al diálogo con Carabineros. Las tomas de terrenos, según señaló una de sus dirigentes, no buscaban hacerse posesión de los terrenos, sino que llamar la atención de las autoridades y conseguir, de una vez por todas, soluciones<sup>43</sup>.

Al día siguiente, el intendente metropolitano, Luis Pareto, se aprestó a recorrer las ocupaciones de terrenos y a dialogar con los líderes de los allegados. Desde Los Morros, la autoridad central informó a la prensa que había dado plazo hasta el lunes 6 de agosto a los pobladores para desalojar. Tras visitar las tomas, el intendente, junto con el alcalde designado de La Cisterna, Iván Moreira, fueron a buscar terrenos donde se pudieran construir viviendas en la comuna y presentar una alternativa a los comités. Pareto volvió a Los Morros y prometió que “es muy probable que al término de este año, o quizás antes que se acabe 1990, pueda llegarse a una solución definitiva del problema”<sup>44</sup>. Los dirigentes de los allegados y el intendente acordaron una nueva reunión para el lunes a primera hora, pese a la insistencia de la autoridad de gobierno en que debían desalojar los terrenos a más tardar al medio día del mismo lunes.

<sup>42</sup> *La Época*, Santiago, 6 de agosto de 1990, p. 22.

<sup>43</sup> *La Época*, Santiago, 4 de agosto de 1990, p. 10.

<sup>44</sup> *La Nación*, Santiago, 5 de agosto de 1990, p. 3.

El domingo 5 de agosto, las negociaciones realizadas por Pareto fueron respaldadas por las declaraciones del ministro del Interior, Enrique Krauss, quien insistió que, en caso de que las familias no depusieran las tomas, estas serían desalojadas. No obstante la posición del gobierno, en la madrugada de ese mismo día, cerca de trescientas cincuenta familias sin casa de la población Las Acacias, del mismo sector de Los Morros, se tomaron un terreno del SERVIU destinado a la construcción de locales comerciales en las cercanías de su población. Al mismo tiempo, cerca de cuarenta familias allegadas de las poblaciones Óscar Bonilla y Juan Pablo II intentaron otra toma, frustrada por la presencia policial.

El lunes, cuando se concretó la reunión de las autoridades de gobierno junto con los dirigentes de las ocupaciones de Los Almendros, estos sumaron a los líderes de la toma de Las Acacias. Aseguraron no estar previamente coordinados, y que las tomas estaban motivadas únicamente por una situación de desesperación de las familias<sup>45</sup>. Fueron ellos los que señalaron a la prensa haber detenido cinco tomas de terrenos más. “**Nuestras bases nos están desbordando**”<sup>46</sup>, dijeron. Los resultados de la reunión según informó la prensa fueron positivos, con un acuerdo de continuar el trabajo de búsqueda de soluciones con el SERVIU y la realización de un estudio de terrenos en la comuna.

Según informó la prensa, los dirigentes salieron de la reunión con la Intendencia Metropolitana con un compromiso: se finalizaban las tomas, se realizaría una encuesta entre las familias y los casos más graves se trasladarían a albergues municipales. A quienes pudieran contar con un terreno para instalar una mediagua, el Estado les cedería una<sup>47</sup>. Sin embargo, los pobladores se mostraron divididos ante el acuerdo tomado por sus dirigentes, por lo que una parte de ellos lo rechazó. Las familias de la toma de Almendros I acordaron no deponer la ocupación del terreno.

Las tomas del Almendro II y Las Acacias fueron disueltas y abandonadas por los propios pobladores, frente a la presión de Fuerzas Especiales de Carabineros. Mientras tanto, los allegados de los Almendros I trasladaron sus enseres al terreno de la junta de vecinos local y se dispusieron a realizar la defensa ante el desalojo, que comenzó a concretarse a eso de las seis de la tarde. Carabineros utilizó Fuerzas Especiales, que incluyó el movimiento de tanquetas, *zorrillos*, helicóptero y el disparo de gases lacrimógenos. La infantería

<sup>45</sup> *La Época*, Santiago, 6 de agosto de 1990, p. 22.

<sup>46</sup> *La Segunda*, Santiago, 6 de agosto de 1990, p. 3.

<sup>47</sup> *La Segunda*, Santiago, 6 de agosto de 1990, p. 32.

de Fuerzas Especiales entró al terreno detrás de las tanquetas, destruyendo las carpas convertidas en viviendas. Más atrás, un camión municipal limpiaba la basura. Las imágenes de prensa transmitieron un escenario de enfrentamiento en el primer desalojo masivo realizado durante el gobierno de transición, el que culminó con pobladores heridos y veinte detenidos<sup>48</sup>.

Las negociaciones posteriores con los desalojados se difuminaron en los registros de prensa. Nuevamente el fenómeno de los allegados y las tomas de terrenos reaparecieron en la discusión de las editoriales de prensa, así como el pronunciamiento de distintos representantes del sistema político, desde la UDI hasta el PCCh<sup>49</sup>. Si bien la discusión se centró en la ilegitimidad de las ocupaciones de terrenos como medio de acceso a la vivienda, existió un reconocido consenso en la urgencia del problema social que las gatilló. Pese a ello, la posición del gobierno encontró un amplio respaldo político<sup>50</sup>. Esta se consagró y resumió en una frase, con fuerte contenido de experiencia temporal y en voz del subsecretario del Ministerio del Interior, Belisario Velasco: “reconocemos el problema de allegados y buscamos solución, pero no podemos hacer milagros”<sup>51</sup>.

Existieron acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad política en la organización de las tomas de terrenos. Públicamente, distintos dirigentes poblacionales del PCCh en el sector apoyaron las tomas, pero no aparecen directamente conduciéndolas. Es más, militantes comunistas acusaron a la UDI de dirigir las ocupaciones, quienes terminaron reconociendo la participación de algunos de sus militantes en ellas<sup>52</sup>. Esta discusión, a nuestro juicio, es muy representativa de la “disputa palmo a palmo” por las poblaciones; es decir, por las bases de apoyo popular, dirigida por la UDI contra el PCCh en este período<sup>53</sup>.

Un informe interno del gobierno responsabilizó de las ocupaciones a grupos de la izquierda radical y a militantes de la UDI. Este informe fue enfocado en una crítica a la capacidad de contención del gobierno, las carencias de su aparato comunicacional y la soledad de Pareto en las negociaciones. Por otra parte, informó la advertencia de nuevas tomas de terrenos en La Pintana,

<sup>48</sup> *La Nación*, Santiago, 7 de agosto de 1990, p. 7; *La Época*, Santiago, 7 de agosto de 1990, p. 12.

<sup>49</sup> *La Nación*, Santiago, 7 de agosto de 1990, p. 15; *La Nación*, Santiago, 10 de agosto de 1990, p. 9; *La Época*, Santiago, 10 de agosto de 1990, p. 6; *El Mercurio*, Santiago, 12 de agosto de 1990, p. A3; *Análisis*, 13 de agosto de 1990, p. 5; *El Mercurio*, Santiago, 8 de agosto de 1990, p. C6.

<sup>50</sup> Belisario Velasco fue Subsecretario del Ministerio del Interior entre 1990 y 1999.

<sup>51</sup> *La Nación*, Santiago, 8 de agosto de 1990, p. 4.

<sup>52</sup> *La Segunda*, Santiago, 8 de agosto de 1990, p. 7; *El Mercurio*, Santiago, 11 de agosto de 1990, p. C7.

<sup>53</sup> Soto, 2006.

Pudahuel, Maipú, Melipilla, San Bernardo, Cerrillos, Lo Espejo y Quilicura. El informe sugirió la descentralización del conflicto vía intervención de organismos intermedios, como los municipios, que permitieron regularizar a escalas locales las demandas de los allegados. Por último, recomendó no hablar más del fenómeno de los allegados, sino del hacinamiento crítico, que permitió distinguir “distintos tipos” de allegamiento<sup>54</sup>.

Las tomas de terrenos del sector de Los Morros demostraron algunas características del conflicto por el acceso a la vivienda durante la transición, como la dialéctica de la lucha institucional y la movilización social, en fuerte oposición por los tiempos de espera para la solución de los problemas habitacionales. Por otra parte, estas fueron adscritas simbólicamente en los discursos de la mayoría de los partidos políticos y medios de prensa, como parte de un entramado de conflictividad social que amenazaba la consolidación democrática. Entonces, desde esta perspectiva, encontramos indicios de la disputa por el control del tiempo social y sus expectativas de futuro, entre la contención y la resolución del conflicto por la vivienda de las familias allegadas, constituyendo la experiencia de una democracia “limitada”.

### *Las tomas de viviendas en Estación Central*

La madrugada del viernes 12 de agosto de 1991, alrededor de ciento treinta familias sin casa de las poblaciones Robert Kennedy y Villa Francia de Estación Central, se tomaron las viviendas en obras de la Villa Brasilia II. Esta fue la primera ocupación de una población en construcción durante el gobierno de Aylwin. La movilización fue motivada por la falta de soluciones habitacionales a los allegados de Estación Central y, en particular, a los agrupados en los comités que realizaron la toma<sup>55</sup>. En esta ocupación apareció con fuerza la demanda de obtener una vivienda dentro de la comuna de origen, tal como lo relató una pobladora a la prensa:

Nosotros nos fuimos a la bodega y sacamos las llaves y las repartimos. Trajimos banderas, frazadas, y pan del desayuno. Lo que pasa es que no queremos más promesas. En 1989 nos dijeron que en estos terrenos no se podía construir y ahora hicieron una villa. Las poblaciones de enfrente ¿qué paso con ellas?

<sup>54</sup> Secretaría General de la Presidencia, *Informe de análisis político*, 10 de agosto de 1990, Archivo Presidencial Patricio Aylwin Azócar.

<sup>55</sup> *La Segunda*, Santiago, 12 de julio de 1991, p. 7.

Habían prometido que eran para nosotros, los allegados de Estación Central, pero trajeron gente de otra parte<sup>56</sup>.

Repartidas las llaves de las viviendas de dos pisos, las familias sin casa procedieron a ocuparlas e instalar simbólicamente las banderas que traían en las ventanas de las viviendas. Luego se concentraron en el centro de la obra, donde gritaron consignas alusivas a su problema habitacional y exigieron la presencia en terreno de las autoridades del MINVU. En paralelo, comenzaron a instalarse en los accesos a la obra, carabineros de la 21 Comisaría de Estación Central y, en los alrededores, Fuerzas Especiales con buses y carros blindados.

A la toma llegó primero el alcalde designado de Estación Central, Felipe Palacios, luego el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Jaime Silva, y el jefe de gabinete de la cartera, Leonardo Moreno, junto con el diputado demócratacristiano por la zona, Carlos Dupré. Antes ya habían llegado dirigentes locales, como Eduardo Medina, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Estación Central, y el vicepresidente de la Junta de Vecinos de Villa Francia, Manuel Valencia. Las personas mencionadas, junto con ocho dirigentes de los comités de vivienda, iniciaron una reunión que duró cerca de cuatro horas en una de las casas tomadas.

Tras una serie de conversaciones bilaterales de cada parte, se sellaron seis puntos de acuerdos. La Villa Brasilia II sería destinada a habitantes de la comuna, se entregarían soluciones habitacionales a estos allegados en Estación Central o en Maipú, además del compromiso de estudios de un terreno por parte del Ministerio de la Vivienda, en conjunto con la creación de un nuevo comité de allegados para los participantes de la toma que no estaban organizados y, por último, el reconocimiento de la Confederación de Comités de Allegados de Estación Central, bautizada como “12 de Julio” por la fecha de la toma. Este último acuerdo sería respaldado por el municipio, mientras que la subsecretaría se comprometió a continuar la gestión de este problema en una pronta reunión con los dirigentes. La toma se disolvió de forma pacífica a eso de las 15 horas<sup>57</sup>.

El alcalde designado de Estación Central declaró que “esta gente tiene una necesidad concreta y no hemos encontrado motivaciones distintas a las

<sup>56</sup> *Las Últimas Noticias*, Santiago, 13 de julio de 1991, p. 16.

<sup>57</sup> *La Época*, Santiago, 13 de julio de 1991, p. 18. *Las Últimas Noticias*, Santiago, 13 de julio de 1991, p. 16.

habitacionales en sus peticiones”<sup>58</sup>. Esta ocupación demostró la realización de una estrategia de parte de los pobladores para ser integrados en un proyecto habitacional a corto plazo, altamente efectiva en tanto constituyeron un hito público. La ocupación de viviendas, que tuvo ciertos grados de espectacularidad en su lucha, puso en movimiento alianzas locales con los dirigentes de base que sirvieron de aliados de la movilización, y que contó con una muy buena cobertura comunicacional<sup>59</sup>.

Así, la movilización pareció ser capaz de sortear la contención al conflicto por medio de la negociación, reformulando sus condiciones y modificando los tiempos de espera. En este caso, no existió un discurso de descalificación de la movilización de parte del gobierno, ni actuaron las fuerzas de represión. Sí operó, en cambio parcialmente, una forma de descentralización de la conflictividad, a través del Municipio de Estación Central que comprometió el reconocimiento institucional de la organización de los allegados. Esta ocupación en particular favoreció las negociaciones de las familias sin casa, tanto así que parece haber generado la alerta de otros sectores allegados de la comuna<sup>60</sup>.

Durante los meses siguientes, se produjeron dos nuevas ocupaciones de viviendas en Santiago. A fines de agosto, alrededor de diez familias de Peñalolén se tomaron igual número de viviendas, pero fueron rápidamente desalojadas y les fue negado el diálogo por parte del Ministerio de la Vivienda<sup>61</sup>. Misma suerte corrieron un mes después los cerca de cien allegados que participaron en la toma de edificios de la población Lo Sierra en Lo Espejo, que fueron inmediatamente sacados y detenidos por Fuerzas Especiales. En este caso, el alcalde de Lo Espejo se comprometió a “estudiar el problema”<sup>62</sup>. Ambas movilizaciones no desarrollaron una mayor capacidad de organización ni de presión, ni tampoco tuvieron la oportunidad de negociar. Los pobladores terminaron desconocidos como interlocutores, criminalizados por la movilización y reprimidos por la policía.

<sup>58</sup> *El Mercurio*, Santiago, 13 de julio de 1991, p. C11.

<sup>59</sup> Es más, se detectó la presencia de policías de civil caracterizados como reporteros. Ver *La Época*, Santiago, 13 de julio de 1991, p. 18.

<sup>60</sup> Al anochecer de esta jornada, un nuevo grupo de pobladores intentó tomarse las obras en construcción. Cerca de ochenta personas ingresaron a la construcción y causaron destrozos en buena parte de las casas. Según informó la prensa, estas provenían de la población Los Nogales de Estación Central. Fue un grupo diferente al de la ocupación de la mañana, y estos incidentes terminaron sin mayores repercusiones. Véase: *El Mercurio*, Santiago, 16 de julio de 1991, p. C8.

<sup>61</sup> *Las Últimas Noticias*, Santiago, 29 de agosto de 1991, p. 7.

<sup>62</sup> *El Mercurio*, Santiago, 26 de septiembre de 1991, p. C6.

### *Los allegados de Peñalolén*

Las movilizaciones por el acceso a la vivienda de las familias sin casa de la comuna de Peñalolén fueron las que alcanzaron mayor grado de notoriedad pública a lo largo de la década del noventa. Entre estas destacan las tomas de terrenos en la ex Hacienda Lo Hermida, ubicada hacia el final de Avenida Grecia, en 1991 y 1992; la marcha en 1995 de las familias del Campamento Esperanza Andina, desde Peñalolén hasta el Congreso Nacional en Valparaíso; y la toma de los terrenos de Miguel Nasur en 1999, conocida como la “Toma de Peñalolén”<sup>63</sup>.

Peñalolén se caracterizó por el desarrollo de estrategias de presión social altamente organizadas por los pobladores que cuestionaron, abiertamente, no solo los tiempos de espera dispuestos por el gobierno, sino que el funcionamiento de la política habitacional en general. A diferencia del resto de las movilizaciones del período, estas sí dejaron registro bibliográfico, como ocurrió con el caso de la toma de Esperanza Andina, la cual se encuentra presente en el debate de algunos textos que han estudiado la protesta y la movilización social durante la transición<sup>64</sup>. El nuevo ciclo del movimiento de los sin casa de Peñalolén se materializó en la constitución de la Coordinadora Comunal de Allegados, dirigida por Olga Leiva y José Luis Flores en 1990, que buscó diferenciarse de las experiencias anteriores de organización de los allegados<sup>65</sup>, ya que la coordinadora optó derechamente por la movilización. En palabras del dirigente José Luis Flores: “concluimos que si seguíamos exclusivamente la vía legal íbamos a fracasar, entonces impulsamos un camino rupturista”<sup>66</sup>.

La primera movilización que realizó esta coordinadora fue una toma simbólica en la Plaza Mártires de Peñalolén, en la población Lo Hermida. Cerca de cien pobladores solicitaron declarar como situación de emergencia el problema de las nueve mil familias allegadas de la comuna. Presentaron una propuesta que se denominó *Por el Derecho de Vivir en la Comuna*, donde exigían detener los permisos de construcción de las inmobiliarias hasta la realización de un estudio sobre los terrenos habilitados en Peñalolén para viviendas sociales, la generación de una ley que permitiera la adquisición de terrenos por parte del MINVU y pidieron la destitución del alcalde designado, Carlos Alarcón<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Miguel Nasur es un empresario chileno vinculado a la banca y clubes deportivos.

<sup>64</sup> Flores, 1992; Flores, 1993; Valenzuela, 2014; De la Maza, 2003.

<sup>65</sup> Flores, 1992, *op. cit.*, pp. 27-35.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 34.

<sup>67</sup> *La Nación*, Santiago, 17 de diciembre de 1990, p. 8; Flores, 1992, *op. cit.*, p. 38.

Los dirigentes de la coordinadora comunal se habían centrado en la gestión de un terreno para las familias allegadas de sus comités. Lograron contactar al propietario del terreno de las parcelas E y F de la ex Hacienda Lo Hermida, quien estuvo dispuesto a vender sus predios a los allegados. La coordinadora presentó una propuesta al MINVU y se acordó una solución con esta cartera, que luego comenzó a dilatarse<sup>68</sup>. Por este motivo se realizó una protesta afuera del Ministerio de Hacienda, justo frente a La Moneda, donde doscientas familias allegadas gritaron una ilustrativa consigna: **“La alegría no llegó, y a la toma nos llevó”**<sup>69</sup>.

Luego de esta movilización, en reunión con el subsecretario del MINVU, Jaime Silva, los allegados lograron un acuerdo: el ministerio aceptó su propuesta y trabajaría en un proyecto de vivienda progresiva durante el año. No obstante, surgió otro problema para la coordinadora: el alcalde de la comuna, junto con otros particulares, se habían interesado en que este terreno se destinara a un parque. Tras tomarse la municipalidad, los pobladores lograron el apoyo del edil al proyecto<sup>70</sup>.

Reunidos en una asamblea general de la Coordinadora Comunal de Allegados de Peñalolén, se criticó la demora en la asignación de los subsidios por parte del ministerio y se solicitó un plazo para su entrega. El compromiso de compraventa con el propietario vencía en diciembre, por lo que los subsidios deberían ser otorgados pronto<sup>71</sup>. Debido a ello, los dirigentes comenzaron a organizar la toma de terrenos.

El 7 de noviembre de 1991, aproximadamente trescientas cincuenta familias, agrupadas en la coordinadora comunal, se tomaron nueve hectáreas del terreno que venían gestionando desde alrededor de un año. Exigieron la entrega inmediata del subsidio que permitía su adquisición a través de la modificación del decreto supremo 140, el cual impedía que un privado comprara el terreno donde el SERVIU construiría, que era exactamente la propuesta de los allegados. La toma duró hasta el 12 de noviembre, día en que se informó la transferencia de los subsidios, haciendo efectiva la adquisición del terreno para la construcción del primer conjunto habitacional de la coordinadora. Pese a que el ministro Etchegaray había declarado que “ninguna acción de presión como ésta puede acelerar el trabajo computacional de selección en el otorgamiento de subsidios”,

<sup>68</sup> Flores, 1992, *op. cit.*, pp. 38-39.

<sup>69</sup> *La Época*, Santiago, 21 de febrero de 1991, p. 7. La negrita es nuestra.

<sup>70</sup> *La Nación*, Santiago, 18 de junio de 1991, p. 15; Flores, 1992, *op. cit.*, p. 42.

<sup>71</sup> Flores, 1992, *op. cit.*, p. 42.

la toma de terrenos demostró lo contrario<sup>72</sup>. El conflicto erosionó los tiempos de espera propuestos por la política de vivienda.

La toma de terrenos fue la cuarta movilización de esta coordinadora, que se había mostrado altamente eficiente en las negociaciones con el MINVU, lo que les permitió controlar, incluso poner plazos propios sobre los tiempos de espera para sus soluciones. El desarrollo de la toma de terrenos en un predio *con derechos adquiridos* legitimó la acción, contrarrestando la criminalización comunicacional de la demanda. De este modo, anularon políticamente al alcalde designado y no hubo represión masiva en ninguna de las movilizaciones.

La siguiente tarea del grupo de dirigentes de la coordinadora comunal fue la constitución de la Unión Intercomunal de Comités de Allegados de la Zona Oriente de Santiago, en febrero de 1992, que agrupó a alrededor de ochocientas familias<sup>73</sup>. A esta se le manifestó una oportunidad inédita: el Ministerio de Vivienda les ofreció mil subsidios financiados por el gobierno de Suecia. Al poco andar, el ministerio se percató de que habían cometido “un error”, ofreciendo solo quinientos subsidios. Al respecto, el dirigente José Luis Flores señaló: “ahí sonaron los tambores al tiro. El Ministerio había ofrecido algo y no cumplía. Nosotros inmediatamente dijimos: si el Ministerio no nos ayuda a resolver este problema, vamos a determinar la toma”<sup>74</sup>.

Cerca de cuatros meses después, el 19 de julio de 1992, novecientas familias organizadas en la Unión Intercomunal de Allegados procedieron a la toma de terrenos de los predios restantes de la ex Hacienda Lo Hermida, de propiedad de Filomena Narváez, instalando sus carpas con nylon, frazadas y sábanas. La reivindicación de los pobladores era la venta de este terreno por medio del financiamiento de los subsidios que ya poseían<sup>75</sup>.

Ese día los dirigentes lograron un acuerdo con el MINVU y con el hijo de la propietaria del terreno, quien manifestó su disposición a vender. La prensa informó el retiro de la ocupación, pues la estrategia de los pobladores fue

<sup>72</sup> *La Segunda*, Santiago, 8 de noviembre de 1991, p. 3; *La Nación*, Santiago, 9 de noviembre de 1991, p. 19; *La Época*, Santiago, 9 de noviembre de 1991, p. 16; *Las Últimas Noticias*, Santiago, 9 de noviembre de 1991, p. 16; *El Mercurio*, Santiago, 10 de noviembre de 1991, p. C8; *La Tercera*, Santiago, 11 de noviembre de 1991, p. 6; *La Segunda*, Santiago, 11 de noviembre de 1991, pp. 5 y 15.

<sup>73</sup> Flores, 1992, *op. cit.*, pp. 51-52.

<sup>74</sup> *Ibid.*, p. 52.

<sup>75</sup> *La Tercera*, Santiago, 20 de julio de 1991, p. 6; *La Nación*, Santiago, 20 de julio de 1991, p. 5; *El Mercurio*, Santiago, 20 de julio de 1991, p. C12; *La Época*, Santiago, 20 de julio de 1991, p. 10.

abandonar parte del terreno ocupado y trasladarse a las parcelas E y F, que eran de propiedad de los allegados de la coordinadora comunal<sup>76</sup>. Antes, habían corrido la línea que dividía los terrenos, por lo que ganaron una franja que posibilitó la instalación de las mediaguas de los allegados de la Intercomunal<sup>77</sup>.

Progresivamente, se reinició la ocupación del terreno de propiedad de Filomena Narváez, al igual que las negociaciones con el MINVU. Tres días después de la ocupación, centenares de pobladores sin casa marcharon en el centro de Santiago para exigir una solución, ya que más de tres mil personas se encontraban en una situación sumamente precaria en los terrenos ocupados<sup>78</sup>. El proceso de consolidación del campamento Esperanza Andina comenzó de inmediato, a través de la organización de ollas comunes y grupos médicos e infantiles<sup>79</sup>.

Durante los siguientes tres años, el conflicto abierto por la conformación del Campamento Esperanza Andina constituyó su propia dinámica y perduró hasta entrado el segundo gobierno de la Concertación. Las negociaciones por el terreno se desarrollaron en una propiedad tomada, que permitió a las familias acceder a una vivienda: en definitiva, lograr conquistar sus expectativas respecto al proceso que impulsaron desde 1990.

Tras un largo proceso de movilización, los terrenos serían, finalmente, expropiados y adquiridos por las familias, quienes en 1999 obtuvieron su solución definitiva. Los allegados de Peñalolén, como hemos dicho, mostraron una importante capacidad estratégica a la hora de enfrentar las negociaciones con el MINVU, desarrollaron formas de lucha de no violencia activa y con un fuerte sentido reivindicativo, que permitió a los pobladores quedarse en los campamentos que formaron entre 1991 y 1992.

## *Conclusiones*

El estudio de la relación entre demandas sociales y construcción social del tiempo histórico constituye una interesante entrada para complejizar los análisis sobre la “transición a la democracia”, en los que ha primado la idea de que la década de 1990 constituye una década donde el orden, la estabilidad, el consenso y la

<sup>76</sup> *La Segunda*, Santiago, 22 de julio de 1991, p. 4.

<sup>77</sup> Flores, 1992, *op. cit.*, p. 70.

<sup>78</sup> *La Segunda*, Santiago, 23 de julio de 1991, p. 48.

<sup>79</sup> Para mayor detalle sobre la organización interna del campamento, véase: Valenzuela, 2014.

paz social fundamentaron una cultura política y un relato refundacional que buscó hegemonizar la consolidación democrática y la espera, como centros de la cada vez más limitada experiencia de la democracia en Chile. Nuestro trabajo, a contrapelo, demuestra indicios de conflictividad social que cuestionaron dicho relato en las movilizaciones de los allegados y manifestaron una serie de presiones que nos invitan a discutir la idea del consenso transicional. Así, las acciones colectivas de actores sociales que ocuparon lugares subalternos y disputaron la experiencia del tiempo, resignificaron la urgencia y la expectativa.

Lo anterior no niega la interacción entre Estado, política pública y demanda social, sino que nos remite a la forma en que se experimentó el tiempo y, por ende, el espacio intersubjetivo donde se resignificó el sentido político de la propia acción colectiva. Apostamos a comprender la transición no como un punto de llegada, sí como un proceso político-social marcado por las disputas, contradicciones y alianzas entre los grupos subordinados y las elites, expresado particularmente en la dimensión temporal entre “tránsito”, “espera” y “final” de una época donde se disputó el contenido de la democracia.

En este artículo hemos demostrado que las familias allegadas durante los primeros cuatro años de la transición realizaron variadas estrategias de acción colectiva para buscar una solución habitacional, generando agrupaciones locales, organizando protestas, tomas de terrenos y negociando con las autoridades, a partir de la movilización de una serie de símbolos como la instalación de la bandera nacional o la presencia masiva de niños en torno a las carpas. Las manifestaciones públicas de los pobladores –que hemos revisado– expresan una expectativa específica sobre el futuro vinculado al bienestar y seguridad que asienta el “sueño de la casa propia”, ante una experiencia colectiva marcada por la penuria de la pobreza: la promesa de su solución marcó directamente su relación con el sistema político, sus instituciones y los tiempos de espera de la transición.

La experiencia de las familias allegadas nos permite asegurar que lejos de presentarse una relación dicotómica y excluyente entre conflicto y consenso, estos mantuvieron una profunda interdependencia como parte del proceso de disputa dentro de la consolidación hegemónica de la transición a la democracia. Si bien escapa a los límites de este trabajo, se puede establecer una comparación con las organizaciones sindicales que, según José Ponce<sup>80</sup>, oscilaron entre la negociación y la movilización, y nos invita a dejar abierta la cuestión sobre si el proceso transicional generó una oportunidad política para la protesta. Esta

<sup>80</sup> Ponce, 2020.

clave de análisis permite comprender con mayor profundidad la agencia de los sectores populares, así como observar las prácticas políticas de las elites y de funcionarios de las instituciones públicas, desde episodios de conflicto que probablemente no estuvieron previstos o no fueron capaces de contener.

En suma, entre lo posible, lo deseable y lo prometido hubo márgenes importantes entre los actores. Los pobladores se movilizaron y ampliaron sus recursos de acción, mas no incidieron en los espacios políticos intelectuales donde la elite de la Concertación intentaba construir la experiencia social del tiempo de la transición. Allí, claramente no hubo coincidencia, mas, la acción colectiva dispone de otros ritmos y formas de expresión y, a veces, articula nuevos sentidos al presente de insatisfacción con la democracia limitada que se inauguró en 1990.

### *Bibliografía y fuentes*

#### FUENTES

Archivo Presidencial Patricio Aylwin. Informes de Análisis del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, 1990-1992.

*Análisis*, Santiago.

*Boletín de sesiones*, Cámara de Diputados, Santiago.

*El Mercurio*, Santiago.

*La Época*, Santiago.

*La Nación*, Santiago.

*La Segunda*, Santiago.

*La Tercera*, Santiago.

*Las Últimas Noticias*, Santiago.

#### BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, ROLANDO, *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, Santiago, Lom Ediciones, 2015.

AYLWIN, PATRICIO, *Programa de Gobierno. Concertación de Partidos por la Democracia*, Santiago, Editorial jurídica Publibey, 1989.

DE LA MAZA, GONZALO, “Los movimientos sociales en la democratización de Chile”, en Paul Drake e Iván Jackson, *El modelo chileno, democracia y desarrollo en los noventas*, Santiago, Lom Ediciones, 1999, pp. 337-405.

DE LA MAZA, GONZALO, “Más pero no Mejor: el problema de la calidad de vida”, en Óscar Muñoz y Carolina Stefoni (comp.), *El Período del Presidente Frei Ruiz Tagle*, Santiago, FLACSO, 2002, pp. 299-332.

- DE LA MAZA, GONZALO, “Sociedad civil y democracia en Chile”, en Aldo Panfichi (ed.), *Sociedad civil, Esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2003, pp. 211-240.
- DÍAZ MUJICA, FERNANDO, “Mitos y hechos del Programa de Vivienda Básica en Santiago de Chile: una mirada desde los beneficiarios”, *Estudio de caso*, n° 1, Santiago, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile, 1997, pp. 1-27.
- DIVISIÓN DE POLÍTICA HABITACIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, *Vivienda, una tarea de dignidad. Estrategia habitacional al año 2000*, Santiago, Gobierno de Chile, 2000.
- DIVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, *Resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional*, Santiago, Gobierno de Chile, 1998.
- ESPINOZA, VICENTE, “Pobladores, participación social y ciudadanía. Entre los pasajes y las anchas alamedas”, *Proposiciones*, vol. 22, Santiago, 1993, pp. 21-53.
- FLORES, JOSÉ LUIS, *Campamento La Esperanza. Recuperando el derecho a soñar*, Santiago, Taller de Acción Cultural, 1992.
- FLORES, JOSÉ LUIS, *Una noche, un pensamiento, una toma. Una población libertaria*, Santiago, Taller de Acción Cultural, 1993.
- GILBERT, ALAN, “Power, Ideology and the Washington Consensus: The Development and Spread of Chilean Housing Policy”, *Housing Studies*, vol. 17, n° 2, Cambridge, 2002, pp. 305-324.
- GÜELL, PEDRO, “En Chile el futuro se hizo posible: ¿y ahora cuál futuro?”, en Pedro Güel et al., *El Chile que viene. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos*, Santiago, Universidad Diego Portales, 2009, pp. 17-36.
- IGLESIAS, MÓNICA, *Rompiendo el cerco: el movimiento de pobladores contra la dictadura*, Santiago, Ediciones Radio Universidad de Chile, 2011.
- LECHNER, NORBERT, *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política*, Santiago, Lom Ediciones, 2002.
- MACDONALD, JOAN, “La vivienda en Chile, hoy”, *Documento de Trabajo*, n° 2, Santiago, Corporación Promoción Universitaria, 1989.
- MOULIAN, TOMÁS, *Chile actual. Anatomía de un mito*, Santiago, Lom Ediciones, 1997.
- PONCE, JOSÉ IGNACIO et al., *Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena*, Santiago, Editorial América en Movimiento, 2018.
- PONCE, JOSÉ IGNACIO, *Huelgas y conflictos en democracia. Cultura política y estrategias sindicales durante la postdictadura chilena (1990-2003)*, tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2020.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Informe de Desarrollo Humano. Las paradojas de la modernización*, Santiago, 1998.
- RODRÍGUEZ, ALFREDO, “Una lección de urbanidad”, *Proposiciones*, n° 25, Santiago, 1994, pp. 144-147.

- ROSENMANM, IGOR, “La ciudad invisible: las tomas de terrenos en Santiago de Chile 1973-1985”, *Revista de Diseño Urbano & Paisaje, DU&P*, n° 31, Santiago, 2016, pp. 30-42.
- SOTO GAMBOA, ÁNGEL, “La irrupción de la UDI en las poblaciones 1983-1986”, *Revista de Historia de Chile y América*, vol. 15, n° 1, Santiago, 2006, pp. 5-38.
- TIRONI, EUGENIO, “¿Es Chile un país moderno? Comentarios sobre el Censo 2002”, en Eugenio Tironi *et al.*, *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002*, Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadernos Bicentenario Presidencia de la República, Santiago, 2003, pp. 15-76.
- TIRONI, EUGENIO, “La cuestión del orden”, *Revista de crítica cultural*, n° 5, Santiago, 1992, pp. 28-29.
- TIRONI, EUGENIO, *La irrupción de las masas y el malestar de las elites*, Santiago, Grijalbo, 1999.
- VALENZUELA, CATHERINE, “El movimiento de pobladores en Santiago. La memoria social del Campamento Esperanza Andina de Peñalolén, Santiago (1992-1998)”, *Revista Historia y Justicia*, n° 3, Santiago, 2014, pp. 109-135.

